

## DEUDA TRIBUTARIA

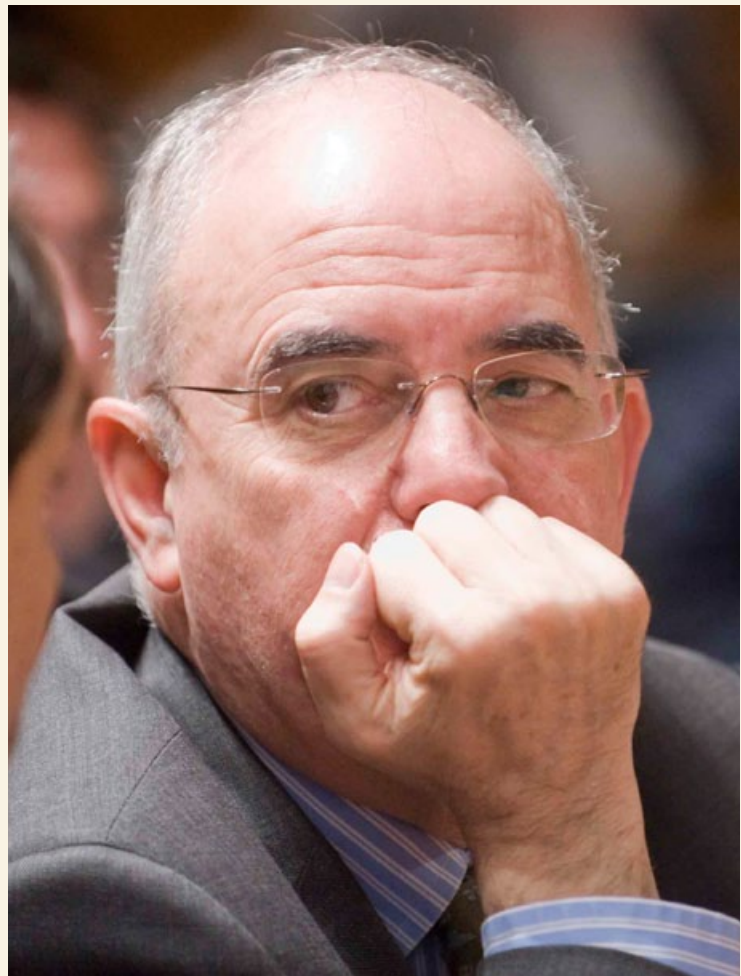
# rebajas en plena crisis

El pacto por el que los Gobiernos central y autonómico han saldado las mermas de impuestos que había acumulado Aragón en las últimas dos décadas ha dinamitado la credibilidad del consejero de Economía, Alberto Larraz. Al final, la DGA ha aceptado un acuerdo de mínimos que le deja igual que antes, solo que con un buen saco de cemento y ladrillos en la peor etapa inmobiliaria que se recuerda

### ■ LUIS FACI

Las buenas noticias se resumen en un titular, que se dio en septiembre del año pasado: Aragón y el Estado llegan a un acuerdo por la **deuda tributaria**. Las malas han llegado detrás, y han lastimado por completo la credibilidad del consejero de Economía, **Alberto Larraz**. Compensaciones muy por debajo de lo requerido, inmuebles de propiedad dudosa, tasaciones de naturaleza equívoca... En esa tesitura, da la sensación de que la DGA tenía que solucionar sí o sí, con un mal acuerdo antes que un buen pleito, el engorro en que se había convertido la cuestión.

El proceso de pérdidas en los tributos cedidos por el Estado a



El acuerdo por la deuda tributaria ha minado la credibilidad de Larraz. Foto: Víctor Lax

Aragón comenzó a finales de los ochenta, aunque no se hizo evidente hasta que el Gobierno de **Aznar** aprobó su modelo de financiación en 1997. Entonces comenzaron a oírse las primeras voces que reclamaban una compensación. Ese año, con la coalición **PP-PAR** en el poder, el entonces director general de Política Fiscal, **Juan Linares**, ya alertó de que la DGA tenía la posibilidad de recla-

mar las mermas ocasionadas por modificaciones a la baja en la normativa fiscal respecto a impuestos como el de sucesiones, el de patrimonio o el de transmisiones patrimoniales, lo que redundaba en pérdidas de la autonomía tributaria de Aragón. El factor clave era la disposición adicional segunda del Estatuto entonces vigente,



Los edificios de la Expo, todavía sin uso después de dos años, forman parte del acuerdo. En la imagen, el pabellón de las comunidades autónomas.

en la que de forma expresa se requerían "compensaciones" por "cualquier minoración de ingresos" (un precepto único entre los reglamentos autonómicos).

En años sucesivos, sobre todo con la reforma del IRPF de 2002, el desequilibrio se hizo más acusado. En 2003, el Ejecutivo autonómico —ya gobernado por el PSOE, en coalición con el PAR, con Eduardo Bandrés a cargo del Departamento de Economía— se dejó de titubeos amenazó en firme a Madrid con reclamar por la vía judicial las mermas.

La deuda, sin embargo, fue subiendo ejercicio tras ejercicio: 274 millones de euros entonces, 428 millones en 2005 y 592 millones en 2007. Esta es la última valoración que se ha hecho pública, ya que ese año la DGA acudió a los tribunales para presionar más al Gobierno central. Con esa proyección, la deuda se situaría en la actualidad en cerca de 750 millones de euros.

El 15 de septiembre de 2009, dos fotografías escenificaron el

principio del fin de este conflicto. En la primera, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel; en la segunda, Alberto Larraz y Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, tras la reunión de la comisión mixta de asuntos económico-financieros entre el Estado y Aragón en el que se cerró el acuerdo.

La cita entre Salgado y Biel sirvió, además, para que suturaran gran parte de las heridas que amenazaban con desangrar a la coalición de socialistas y

en efectivo, sino en un rosario de edificios en medio en una crisis inmobiliaria sin precedentes.

El principal 'torpedo' contra la posición esgrimida por la DGA ha sido el informe del Consejo de Estado, cuya difusión sembró de un nerviosismo inusitado a Larraz. El mencionado documento menciona, sin lugar a equívocos, que "el valor de los bienes" que el Estado cederá para compensar las mermas "no superará la mitad de la cifra exigida por Aragón". Esto es, no más de 300 millones de euros, frente a los 500 que el

## EL ESTADO NO VA A ABONAR "NI LA MITAD DE LA CIFRA EXIGIDA POR ARAGÓN"

aragonesistas. Ese fue el momento del gran titular: Aragón y el Estado llegan a un acuerdo para saldar la deuda. Entonces ya se vislumbraban las primeras dudas: Larraz cifró el pacto en unos 500 millones de euros, casi una quinta parte menos de lo debido. Una cantidad, por otro lado que casi en su totalidad se traduciría, no en dinero

consejero de Economía consideraba irrenunciables. Para resaltar las bondades del acuerdo, el informe dejaba claro que la DGA tenía opciones de recibir todo el importe si reclamaba en los tribunales. En esta cuestión, el argumento del Gobierno central es que si Aragón



La dudosa titularidad del inmueble de La Caridad, en el centro de Zaragoza, ha suscitado una importante polémica.

validaba el nuevo sistema de financiación autonómico, daba por bueno el cobro de la deuda.

La reacción de **Larraz**, hasta ahora uno de los activos más visibles de los socialistas en el Gobierno regional, fue de desconcierto. Se enrocó en lo logrado —“no hemos perdido la diferencia sino que hemos ganado el total”—, alegó que el pleito era “dudoso” y sin embargo no supo

explicar los puntos oscuros de sus argumentos: el hecho de que se incluyese por ejemplo la **Torre del Agua** de la **Expo**, cuando es evidente que no se puede vender puesto que se ha cedido a la **CAI** por dos décadas, o la segunda estación del **AVE**, cuando hasta la vicepresidenta **Fernández de la Vega** admitió públicamente que esta instalación quedaba fuera; la aceptación de edificios de titu-

laridad más que dudosa como **La Caridad**, de lo que le había alertado el propio Ayuntamiento de Zaragoza; y, como guinda, la famosa supuesta tasación por parte de **Tinsa** de los bienes que pasarán a manos de la comunidad, un documento elaborado en septiembre de 2009 por la empresa tasadora a instancias de **Expoagua** con el objetivo de hacer frente a una garantía hipotecaria. Una *boutade*

## ¿El regreso de Eva Almunia?

La criba de altos cargos que planea el Ejecutivo de **Rodríguez Zapatero**, que afectará finalmente no solo a directores generales sino también a secretarios de Estado, podría ser la excusa perfecta para facilitar el regreso a Aragón de **Eva Almunia**, con el objetivo de que comience a preparar su candidatura a las elecciones regionales del año próximo. El único problema que tendría esta opción es que trasladaría la impresión de que **Almunia** ha salido por la puerta de atrás del **Ministerio de Educación**, lo que dañaría la imagen de la futura candidata socialista. La reducción de jefes en el Gobierno es un golpe de efecto que planea **La Moncloa** para, antes de que acabe el semestre de la presidencia española de la **UE**, dar la impresión en **Europa** de que aquí se combate el exceso de gasto público. Es más que probable que la medida afecte a los altos cargos



aragoneses en **Madrid**. En estos momentos, la comunidad está representada por cinco secretarios de estado (números dos del respectivo ministerio): **Almunia**, de **Educación**; **Víctor Morlán**, de **Infraestructuras**; **Felipe Pétriz**, de **Investigación**; **Carlos Ocaña**, de **Hacienda y Presupuestos**; y **Mercedes Gallizo**, de **Instituciones Penitenciarias**. Detrás, hay otros un director general, **Alain Cuenca**, de **Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales**.

Lo cierto es que los mayores ‘tijeretas’ podrían dirigirse a los ministerios de **Asuntos Exteriores** y de **Educación**, lo que da más posibilidades al regreso de **Almunia**. También está en el aire **Morlán**, mientras que parece más complicado la vuelta de **Felipe Pétriz**, nombrado hace apenas cuatro meses para el cargo.

## La marcha de Elboj

El alcalde de Huesca, **Fernando Elboj**, desde 1999 dejará su cargo el próximo 3 de julio. Hizo pública su decisión a mitad de abril en un golpe de efecto, no tanto por el hecho en sí como porque consiguió con ello adelantarse al movimiento del partido y lograr de este modo una cierta imagen de marcha voluntaria. En el fondo, el relevo del primer edil oscense estaba ya decidido en la cúpula de los socialistas, aunque como en el resto de situaciones similares el paso no se pretendía dar hasta el segundo semestre del año. Al final, **Elboj** constató que no tenía los apoyos suficientes para seguir y decidió dar el primer paso. Le sustituirá su teniente de alcalde, **Luis Felipe**, un relevo natural que salvará al **PSOE** del fuera del juego en el que se encontraba.



Edificio de Capitanía General, en la plaza Aragón.

que incluso generó la respuesta airada del director técnico de Tinsa, **Rafael Espés**.

A medida que se fue conociendo la naturaleza del acuerdo, el Gobierno de Aragón rebajó la intensidad de los calificativos al describirlo: **Iglesias** pasó de hablar de un pacto "excelente" a respaldar la "buena negociación" siete meses más tarde; en similares términos, **Larraz** pasó del "excelente negocio" al acuerdo "muy razonable".

Entretanto, los socios del **PSOE** han optado por no hurgar en la herida e incluso por justificar el acuerdo. El **PAR** se mantuvo en un discreto segundo plano, más allá del malestar ante la falta de información recibida de los socialistas, hasta que el vicepresidente **Biel** optó por dar una palmada en la espalda de **Larraz**. "Cada valoración es subjetiva", advirtió el líder aragonésista, antes de recalcar que el pacto "también podía haber sido peor".

Por la postura de ambas partes, desde la oposición han arreciado las críticas, hasta el punto de que el **PP** ha llegado a exigir la dimisión del titular de Economía. El portavoz de los populares en las Cortes, **Eloy Suárez**, tachó de "impresentables" las palabras de **Larraz**; la presiden-

ta de **CHA**, **Nieves Ibeas**, tildó al consejero de "incompetente"; y el coordinador de **IU**, **Adolfo Barrena**, calificó de "patético" el papel de la DGA.

Y no hay que olvidar que, en cuanto se cierre por fin el conflicto por las mermas tributarias, el Gobierno de Aragón tendrá que empezar a pensar en devolver los 180 millones de euros que le reclama Hacienda por la caída de ingresos en 2008; más concretamente, porque la comunidad recibió del Gobierno central en ese ejercicio más dinero por impuestos cedidos del que finalmente recaudó, de forma que la diferencia tiene que volver a las arcas del Estado. Parece difícil que, en este contexto, la **DGA** se atreva a pagar en 'especie' y devuelva a **Madrid** alguno de los edificios ahora ofrecidos.

Por si fuera poco, y pese a que Aragón aún no ha visto un euro, el acuerdo por las mermas ha generado —como temía el Gobierno central, por lo que le llevó a retrasar todo lo posible el pacto— reclamaciones similares en otras comunidades autónomas. Así, **Madrid** anunció en marzo que interpondría un contencioso para reclamar los 5.500 millones que considera que le adeuda el Estado, y semanas más tarde siguió su ejemplo **Murcia**, en este caso por un importe de unos 450 mi-



Fernando Elboj.

llones. Hay que recordar que, hace un mes, el Ministerio de Administraciones Públicas dio a conocer el acuerdo alcanzado con **Andalucía** para resolver un conflicto similar, cuantificado en 1.200 millones de los que una parte se compensa en efectivo y la otra con inmuebles. Y que, en febrero de 2008, el Consejo de Ministros aprobó otros 517 millones para **Cataluña** a cuenta de un artículo del Estatuto de esa comunidad. ■